

Resolución sobre los casinos de titularidad Públicos.

En España el primer operador de juego es el propio Estado, seguido de una conocida asociación de personas invidentes y con diversidad funcional ONCE; a ello se suman algunas Comunidades Autónomas cuya administración gestiona diferentes tipos de Loterías.

Canarias

Tal es la situación que se nos plantea hoy en Tenerife, donde el grupo que gobierna el Cabildo está empeñado en privatizar 3 empresas de titularidad pública que dan beneficios, como es el caso de los Casinos Públicos de Tenerife.

Antecedentes de la situación actual

El Pleno del Cabildo de Tenerife del 30 de marzo de 2012 acordó llevar a cabo una reestructuración del sector público empresarial, estableciendo una serie de medidas tendentes a racionalizar los recursos públicos de la Corporación. Entre dichas medidas se acordó extinguirlas, o desinvertir en las mismas.

El marco normativo impuesto por la Unión Europea plantea tres condiciones básicas para aceptar que el balance de una sociedad pública no compute como déficit: el primero es que disfrute de autonomía de acción respecto del gobierno regional o local; el segundo, que ofrezca servicios de mercado; y el tercero, que los ingresos obtenidos por su operativa en el mercado financien al menos el 50 por ciento de sus costes operativos.

La realidad actual es que sí existen casinos **públicos** en Tenerife desde hace más de tres décadas; que **son rentables** y aportan valiosos recursos financieros para el erario público; y que en comparación con una eventual alternativa de casinos privados, su carácter público representa un muro de contención frente a graves riesgos como la opacidad fiscal, la facilitación de blanqueo de capitales y la eventual penetración o consolidación de mafias, aspectos todos que por desgracia caracterizan a los casinos de titularidad privada en muchos lugares del mundo.

El empeño por privatizar los Casinos supone otro riesgo adicional: la precarización del empleo de las personas que en ellos trabajan; personas que disfrutaban de un salario y unas condiciones laborales relativamente decentes, sobre todo si se comparan con el deterioro generalizado de las condiciones de trabajo y retribución en el mercado laboral, tras ocho duros años de crisis y

la imposición general en el Estado español de políticas neoliberales, regresivas e incentivadoras de la desigualdad social.

Por tanto solicitamos el apoyo del congreso mundial UNIJUEGO a instar al Cabildo de Tenerife a que no privatice empresas públicas rentables.